

El titular del gremio que reúne a las inversiones hispanas en el país reconoce que los inversionistas están ‘tranquilo-nerviosos’, “porque la institucionalidad de largo plazo y la certeza son claves”. Aunque admite que los inversores no están pensando en dejar el país, sí lanza una crítica al Gobierno: “No hemos sido escuchados todo lo que quisiéramos”.

• JESSICA MARTICORENA

La inversión española en Chile tiene un siglo de historia. En los años 90 y parte de los 2000, hubo una verdadera oleada de capitales de empresas hispanas que invirtieron en sectores estratégicos de la economía chilena, como el energético, las telecomunicaciones, la banca, seguros, servicios sanitarios, infraestructura y turismo, entre otros.

Los datos oficiales dan cuenta de que España es el segundo inversionista más importante en Chile, con un stock de inversión acumulado en el país de unos US\$ 35 mil millones. Una inversión que ha generado más de 42 mil empleos directos y cerca de 300 mil empleos indirectos, según la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoec). “La inversión española es de largo plazo, hay inversionistas que llevan 30 o 40 años en Chile. Son inversionistas que no son ave de paso, no vienen a hacer una pasada, son empresas que vienen a quedarse y que no se quieren ir. Al revés, queremos ir por más, seguir invirtiendo”, subraya Carlos Molina, presidente de Camacoec y socio del estudio Molina Ríos Abogados, especialista en temas de infraestructura y energía. Entrega un dato: para el estallido social, las firmas hispanas agrupadas en el gremio hicieron un ejercicio y concluyeron que el 85% de ellas pagaba un sueldo promedio superior a los \$ 600 mil, “harto más que la media nacional de esa época”, subraya Molina.

Pero en el último tiempo, los inversionistas de la península ibérica están preocupados por el devenir del país. “Estamos tranquilo-nerviosos, porque cuando tienes inversiones de gran envergadura, la institucionalidad de largo plazo y la certeza son claves”, acota Molina.

—¿Hay menos certeza jurídica en Chile?

“Desde la mirada del inversionista extranjero, Chile sigue siendo un país ordenado, que marca la diferencia, donde la institucionalidad funciona y es un activo que hay que cuidar. Acá puedes tener un conflicto incluso con el Estado chileno, ir a un tribunal chileno, te puede ir bien o ir mal, pero no es porque sea corrupto, y eso es un activo valiosísimo. Pero se está mirando con mayor cuidado que antes, porque si te dan un permiso de calificación ambiental y después te lo quitan, ahí empieza la incerteza. Y eso está pasando. También ocurrió lo de los retiros previsionales de rentas vitalicias, donde se cambiaron las reglas del juego.

El inversionista español no pide privilegios, ni beneficios ni tratos especiales, solo pide que se pongan las reglas del juego que se estimen pertinentes, pero que seamos claros en esas reglas. Y el inversionista evaluará si esas reglas le resultan atractivas o no. Las empresas españolas no le tienen miedo a la regulación, siempre y cuando se dé en un marco de certeza jurídica y respeto por la institucionalidad”.

—Tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito, ¿el inversionista está más tranquilo?

“No, porque Chile no ha logrado el pacto social que necesita. Obviamente, había preocupación con el proceso anterior, pero no es que ahora tras el plebiscito estemos todos felices, sigue la preocupación hasta que concluya el proceso”.

—Y en materia tributaria, ¿les inquieta la



Carlos Molina, presidente de la Cámara Española de Comercio:

“FALTAN SEÑALES PARA SEGUIR INVIRTIENDO, las echamos de menos”

discusión en curso?

“Pongamos esto en perspectiva: el 51% del impuesto a la renta en Chile lo paga el inversionista extranjero. El 48% del IVA lo pagan las empresas extranjeras. No tenemos ningún temor a pagar el impuesto que se defina, en la medida que no sea una locura, que sea razonable. ¿Y qué es razonable? Normas OCDE. El inversionista no está ni a favor ni en contra del Gobierno, el inversionista está en los lugares donde hay institucionalidad y certeza jurídica, donde se respetan los contratos”.

—El Gobierno quiere actualizar los tratados de libre comercio. ¿Es una fuente de incertidumbre para el inversor español?

“El lunes recién pasado, yo me junté con el canciller y con el subsecretario Ahumada, y les pregunté qué querían revisar del tratado que hay suscrito con España. Y me dijeron que querían actualizar el convenio que ya tiene muchos años. El inversionista español no tiene temor a sentarse a conversar en la medida que a uno no le planteen nada extraño”.

—¿Y qué les plantearon en concreto?

“No nos plantearon nada específico. Más que nada fue decir que querían actualizarlo, porque es antiguo. Pero no sabemos qué quieren actualizar. Ahora, los tratados comerciales son contratos bilaterales, no se pueden modificar de manera unilateral. Si se va a plantear algo extraño, se tendrá que negociar. Pero hasta ahora, no tengo ningún mensaje de la autoridad que me diga qué en particular quieren actualizar”.

—Lo que ha dicho la Subreí es que quiere actualizar los tratados en materias laboral, de equidad de género, medioambiental.

“Nuestras empresas están compitiendo en los cinco continentes con los más altos estándares, con normas del primer mundo en materia de paridad de género, de normas medioambientales, de buenas prácticas empresariales”.

—Entonces, ¿tiene sentido para ustedes que actualicen el acuerdo cuando las empresas españolas tienen estándares mundiales?

“No tiene ningún sentido, pero tampoco tenemos ningún problema. Ahora, si quisieran tocar el tema de la solución de controversias, eso sí es un tema sensible, pero tampoco se ha planteado. Reitero, Chile tiene un activo país que no puede perder: que un inversionista extranjero pueda convertir un tema en Santiago de Chile, acudir a los tribunales, a las cortes y tener tranquilidad respecto de lo que se resuelva”.

—¿Faltan señales más concretas del Gobierno?

“Yo creo que al Gobierno le ha costado la instalación. Siento que recién ahora está abriendo una puerta a conversar y a escuchar. Y hay que escuchar al inversionista extranjero”.

—¿Percibe una cierta desconfianza hacia el inversionista extranjero?

“No lo llamaría desconfianza, sí reticencia. Al Gobierno le ha faltado ser más receptivo, porque el inversionista sí necesita ser oído. Ahí falta una mirada estratégica en la relación público-privada. Y yo creo que es porque al Gobierno le costó instalarse. Con gobiernos anteriores también nos costó, pero menos”.

—¿Se han reunido con otras autoridades?

“Sí, nosotros hemos pedido las reuniones, me hubiera encantado que nos hubiesen invitado. Nos juntamos hace un mes con el ministro de Economía, el lunes con la canciller, el otro miércoles nos reuniremos con el ministro de Obras Públicas, y estamos gestionando una reunión con el nuevo ministro de Energía, porque con el anterior nunca nos pudimos reunir. Y espero que nos podamos juntar con el ministro de Hacienda, considerando el calado de inversionista que representamos.

Ahora se está entendiendo que, para salir de los períodos de crisis, es importante tener flujos de capital extranjero que generan empleo, generan riqueza, que la inversión extranjera es estratégica para el Gobierno. Importan mucho las señales”.

—¿Qué otras señales necesitan?

“Lo primero, poder conversar, que nos reciban. No hemos sido escuchados todo lo que quisiéramos.

La señal siguiente es que se precise, por ejemplo, en los tratados comerciales qué se quiere revisar en concreto. Pero no me diga ‘los vamos a revisar’, y nos quedamos ahí.

No queremos tener una conversación meramente protocolar, para eso nos encontramos en un cóctel. Queremos saber a qué están dispuestos concretamente. Que la autoridad nos pueda plantear cómo ve el futuro en los próximos tres a cuatro años.

Por ejemplo, en el gobierno de Bachelet fueron claros, en lo bueno y en lo malo, y se agradece esa franqueza. Sabíamos cuál era el rayado de cancha. Y eso está faltando ahora.

Me encantaría del Gobierno saber cuáles son las reglas que vamos a tener en tres o cuatro años. Y los inversionistas no se van a ir por eso, se van si les cambian los contratos”.

—La inversión española está presente de manera importante en infraestructura. En la reunión que tendrán con el ministro de Obras Públicas, ¿ustedes esperarían que les den señales de que se mantendrá la alianza público-privada en la construcción de hospitales, cárceles, etc.?

“Lo público tiene que convivir con lo privado, es perfectamente compatible. Y esperaríamos que este Gobierno no solo mantenga la alianza público-privada, sino que la incentive aún más. En educación, por ejemplo, por qué no hacemos un sistema concesionado que sea capaz de hacerse cargo de la infraestructura de los colegios de Chile, y que en cinco años tengamos colegios de primera generación. Que sean gestionados por el Estado y que el privado solo los construya”.

—Pero el programa del Gobierno apunta a dar un rol mayor al Estado. ¿Ve realmente factible que se dé más espacio a los privados?

“En eso consiste liderar. El Presidente tiene que tomar una decisión y avanzar en ella. Por ejemplo, para enfrentar la escasez de agua, la desalinización es una excelente solución. Pero el Gobierno, el Estado chileno, no tiene recursos ni capacidad para abordar proyectos de esa envergadura. ¿Por un tema dogmático no hacemos nada? Al contrario, en sectores donde el Estado no puede estar, que vengan los particulares. Y no le regalemos nada al inversionista extranjero. Nadie quiere ningún regalo.

Entendamos que el dominio de las autopistas es chileno, el dominio del Centro de Justicia que está concesionado es chileno. La infraestructura portuaria concesionada es chilena. Este modelo bien vilipendiado está llegando a su fin en su primera etapa, y las concesiones que son chilenas, ¿queremos que las explote el Estado o que las explote un privado? Hay que dar señales en ese sentido”.

—¿Y ve señales a favor o en contra?

“No hay señales, ni a favor ni en contra. Lo único que queremos es señales para seguir invirtiendo y faltan señales para seguir invirtiendo, las echamos de menos. Y por eso estamos contentos de que nos reciban las autoridades. Queremos que nos escuchen y que si ellos tienen algún requerimiento que hacer, discutámoslo. Queremos seguir aportando, siempre en condiciones que sean razonables”.

—La agenda proinversión, que lanzó la semana pasada el Gobierno, ¿va en la dirección correcta, es suficiente?

“Sí, va en la línea correcta. Es una buena señal. Hay que modernizar el Estado, agilizar la permisología, crear una ventanilla única. Si para hacer un proyecto necesito cinco años de tramitación y al cabo de ese tiempo tampoco tengo certeza, es un deber del Estado chileno avanzar”.

“La autopista AVO es cara, pero hay maneras de bajar los precios. Se puede alargar la concesión un par de años”

—De todos los sectores donde está presente la inversión española, ¿en cuáles ve mayores flancos de incertidumbre?

“Los más regulados, el asegurador y la banca, cero problema, o muy pocos, salvo las turbulencias que tuvimos con los retiros, y son sectores con reglamentación fuerte, con fiscalización dura.

En obras públicas o energía, que son proyectos grandes que involucran inversiones cuantiosas, hay flancos. La construcción es una de las actividades más litigiosa a nivel mundial. El tema es cómo resolvemos el problema.

En el sistema eléctrico hemos tenido una revolución, y la inversión española ahí es potentísima, pero tenemos un problema para transportar la energía, porque hay que construir torres. ¿Tenemos energía y no la vamos a transmitir? Tenemos que compatibilizar que tengamos energía limpia, barata, segura y que llegue a todo Chile. Para eso hay que romper

huevo, pero rompámoslos bien. Ahí hay un rol del Estado, de regular para que haya una transmisión adecuada, limpia, que respete el medio ambiente y el derecho de propiedad. Y ahí falta”.

—Concesiones también ha sido un sector de conflictos con la autoridad en el pasado. Los cobros de las autopistas, el aeropuerto, que ha sido emblemático.

“El ministro anterior fue muy conflictivo, no comparto la mirada que tenía de política pública. Hoy tenemos un tema con el aeropuerto, esperamos que con la nueva autoridad podamos buscar entendimientos”.

—También han tenido problemas con los hospitales concesionados, y se han encarecido las obras. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Hay

que adecuar los contratos, flexibilizarlos?

“Hay que buscar fórmulas. Por ejemplo, la recién inaugurada autopista AVO es cara, pero hay maneras de bajar los precios. ¿Cómo? Se puede alargar la concesión un par de años, y eso permite bajar el costo a la comunidad. Sería una buena señal de política pública. También se pueden modificar los polinomios, que es una ecuación para determinar el precio de los contratos. Se pueden ajustar para que sean equilibrados y llegar a un precio razonable”.

—¿Se lo van a plantear al ministro de Obras Públicas?

“Queremos establecer con el ministro una mesa de trabajo, al igual que con el ministro de Energía, para que discutamos los temas que generan conflicto. Y manifestarles que estamos disponibles”.